

ARGENTINA



**13ª ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES
EN EL ESTATUTO DE ROMA
SOBRE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL**

Debate General

Intervención de la Delegación argentina

Nueva York, 10 de diciembre 2014

Sírvase verificar durante lectura

**13TH ASSEMBLY OF STATES PARTIES
TO THE ROME STATUTE ON THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT**

General debate

Statement by the Argentine delegation

New York, 10 December 2014

Please check against delivery



Misión Permanente de la
República Argentina
Naciones Unidas

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Señor Presidente,

Quisiera comenzar esta intervención felicitando al Ministro Sidiki Kaba, de Senegal, por su elección como Presidente de la Asamblea de Estados Partes.

También quisiera agradecer a la Emb. Tiina Intelmann, de Estonia, Presidente saliente de la ASP, y al Presidente de la Corte Penal Internacional, Juez. Sang-Hyun Song, por su dedicación durante los años de su mandato.

El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional constituyen uno de los logros más notables de la diplomacia multilateral, y su contribución a la lucha contra la impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es evidente. La Corte es hoy un tribunal permanente de justicia penal internacional en pleno funcionamiento.

Pero la Corte no está exenta de desafíos.

Uno de ellos es preservar la independencia judicial de la Corte. La característica principal de todo tribunal de justicia es su independencia. Los Estados Partes, por tanto, debemos evitar inmiscuirnos en las funciones de la Corte, porque ello podría menoscabar su independencia, incluso, a través de la pretensión de supervisar la eficiencia o los gastos de la Corte.

Otro de ellos es el de dotar a la Corte de los recursos financieros necesarios para el cabal ejercicio de sus funciones. La Argentina ve con mucha preocupación que recortes recomendados por el Comité de Presupuesto y Finanzas llevarán, en los hechos, a que investigaciones adicionales en Libia no puedan ser iniciadas por la Oficina de la Fiscal. No obstante, en un espíritu de compromiso, la Argentina ha brindado consenso al proyecto de resolución de presupuesto que se someterá a consideración de esta Asamblea de Estados Partes. Al respecto, encomiamos la labor del facilitador sobre presupuesto, el Emb. Druml, de Austria, por su dedicación para poder lograr presentar a esta Asamblea una fórmula de consenso, que esperamos sea aceptada por todos los Estados Partes.

Otro desafío es la cooperación. Un sistema de justicia penal internacional de carácter permanente requiere, necesariamente, de la cooperación de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, sean o no Partes en el Estatuto de Roma, y esa cooperación es particularmente relevante en cuanto a las órdenes de arresto.

También debe destacarse la posibilidad de que la cooperación entre los Estados permita la investigación y prosecución de los crímenes de mayor gravedad para la comunidad internacional. En tal sentido, queremos mencionar la iniciativa para la adopción de un instrumento multilateral en materia de asistencia jurídica y extradición para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, promovida por la Argentina, Bélgica, Eslovenia y los Países Bajos, y que cuenta actualmente con un amplio apoyo de Estados que han suscripto a tal fin la Declaración Permanente de apoyo a esta iniciativa. Invitamos a todos los Estados a suscribir esa Declaración Permanente y a acompañarnos en las actividades de promoción de la iniciativa en los foros pertinentes.

También la Argentina desea señalar la importancia de otros mecanismos externos para el apoyo de las necesidades de cooperación con la CPI, en particular la Comisión Humanitaria Internacional de Investigación y la iniciativa "Justice Rapid Response".

Finalmente, un desafío que guarda relación con la organización en la que hoy tiene lugar esta Asamblea: la relación con las Naciones Unidas.

Con el correr de los años desde la entrada en vigor del Estatuto, la necesidad de la rendición de cuentas por crímenes del Estatuto de Roma ha sido integrada en forma tangible en las consideraciones de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto, y el Consejo de Seguridad ha hecho lo propio, integrando a la propia Corte en sus consideraciones sobre situaciones concretas.

La relación entre esta organización y la Corte es crucial, siempre respetando la independencia de la Corte. La Argentina desea reconocer la labor cooperativa de la Oficina de Asuntos Jurídicos (OLA), que es el punto focal para la CPI, y las Directrices sobre "contactos no esenciales" del Secretario General, aplicables a todos los funcionarios de la organización, independientemente de su rango.

Pero la relación de las Naciones Unidas con la Corte también está marcada por la relación de la Corte con el Consejo de Seguridad, puesto que este órgano tiene la facultad de hacer remisiones a la Corte, y lo ha hecho respecto de dos situaciones.

El seguimiento efectivo de las remisiones que el Consejo hace a la Corte Penal Internacional es imperativo. El Consejo no puede recibir informes de la Fiscal sin hacer un seguimiento responsable de la evolución que ella plantea. El 23 de octubre de 2014, la Presidencia argentina del Consejo de Seguridad organizó un debate abierto sobre los métodos de trabajo del Consejo, que abordó, como uno de sus aspectos centrales, el seguimiento efectivo de las remisiones a la Corte Penal Internacional. Ese debate puso nuevamente en evidencia que el seguimiento de las remisiones a la CPI cuenta con el apoyo mayoritario de los Miembros del Consejo y de la membresía ampliada de las Naciones Unidas. Es por ello que exhortamos al Consejo de Seguridad a establecer un mecanismo para ese seguimiento lo antes posible.

Otro aspecto que preocupa a la Argentina es la disposición, en las dos remisiones hechas, que busca exceptuar de la jurisdicción de la Corte a los nacionales de Estados no Partes. Conforme el Estatuto de Roma, la Corte, en una remisión, ejerce su jurisdicción sobre nacionales de Partes y no Partes en el Estatuto de Roma. Ningún pronunciamiento del Consejo de Seguridad tiene la capacidad de enmendar el Estatuto para brindar inmunidad a nacionales de Estados no Partes que cometan crímenes del Estatuto en una situación remitida a la Corte. Es decir, nada en el texto de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad remitiendo situaciones a la Corte tiene la capacidad de alterar las normas del Estatuto ni en cuanto a la jurisdicción de la Corte en la situación, ni en cuanto a que, en definitiva, en caso de requerirse una decisión, es la misma Corte la jueza de su propia jurisdicción.

En relación con el presupuesto de la Corte, quisiera destacar que hasta el momento el costo financiero de las remisiones hechas por el Consejo de Seguridad a la Corte ha sido sufragado exclusivamente por los Estados Partes. La resolución de la Asamblea General 68/305, recientemente adoptada, refleja ese hecho. Pero también es un hecho que el Estatuto de Roma dispone que los costos de las remisiones tienen que ser sufragados por las Naciones Unidas, y ello también está reflejado en el Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Corte, aprobado por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Argentina y otros miembros de las Naciones Unidas cuestionan la práctica lamentable del Consejo de Seguridad en materia de financiamiento de las remisiones a pesar de una gran mayoría en apoyo del cabal cumplimiento del art. 115.b. del Estatuto de Roma y del art. 13 el Acuerdo de Relación, y de que se trata de una facultad de la Asamblea General. No es aceptable que la Asamblea General sea puesta en una posición de no poder tomar una decisión sobre este tema, para el cual está plenamente facultada por la Carta de las Naciones Unidas, y cree que debe ser abordado en forma necesaria. No hacerlo que puede poner en riesgo la sostenibilidad de las investigaciones de la Corte y la credibilidad de las Naciones Unidas. Por ello, la Argentina exhorta a las Partes en el Estatuto de Roma a trabajar conjuntamente para

asegurar que la Asamblea General de las Naciones Unidas aborde el financiamiento de las remisiones del Consejo de Seguridad a la CPI en forma urgente.

El crimen de agresión es uno de los logros del Estatuto de Roma, a través de las enmiendas de Kampala. Mi país, como muchos otros estados Partes, está comprometido con la ratificación, a la brevedad, posible, de las enmiendas. La Argentina también está comprometida con la activación de la jurisdicción de la Corte respecto del crimen de agresión en 2017. Este también es un aspecto que se relaciona con las Naciones Unidas, porque aún cuando con la adopción de la enmienda de adopción, el Estatuto de Roma ha hecho una contribución sustantiva a la paz y seguridad internacionales, lograr una referencia sustantiva al crimen de agresión parece ser una tarea casi imposible, debido a la oposición de unos pocos Estados, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Señor Presidente:

Para finalizar, quisiéramos recordar –como indica la Declaración de Kampala- “la noble misión y la función de la Corte Penal Internacional en un sistema multilateral que tiene como objetivo poner fin a la impunidad, establecer el imperio de la ley, cultivar y fomentar el respeto de los derechos humanos y lograr una paz duradera, de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, y reiterar el firme compromiso de la Argentina con la Corte Penal Internacional.

Muchas gracias.

Mr. President,

At the outset, I would like to congratulate Minister Sidiki Kaba of Senegal for his election as President of the Assembly of States Parties.

I would also like to thank Amb. Tiina Intelmann of Estonia, outgoing President of the ASP, and ICC President, Judge Sang-Hyun Song, for his dedication during his tenure.

The Rome Statute and the International Criminal Court are one of the most notable achievements of multilateral diplomacy, and their contribution to the fight against impunity with regard to crimes against humanity, genocide and war crimes is evident. The Court is today a fully functioning permanent criminal justice tribunal.

But there are still some challenges.

One of those challenges is preserving the judicial independence of the Court. The main characteristic of a court of law is its independence. States Parties must avoid impinging upon the Court's functions, as that could undermine its independence, even through attempts of monitoring the efficiency or the expenditures of the Court.

Another challenge is providing the Court with the necessary financial resources for fulfilling its functions. Argentina is concerned about the fact that the cuts recommended by the CBF will in fact lead to no additional investigations be initiated by the OTP in Libya. Nevertheless, in a spirit of compromise, Argentina has given consensus to the draft budget resolution that will be considered by this ASP. In that regard, we commend the work of the facilitator, Amb. Druml of Austria, for his dedication to presenting this Assembly a consensus formula, which we hope will be accepted by all States Parties.

Cooperation is also a challenge. A permanent international criminal justice system requires cooperation by all Member States of the United Nations –both Parties and non Parties to the Rome Statute-, and such cooperation is particularly relevant with regard to arrest warrants.

I would also like to highlight initiatives fostering cooperation between States for the investigation and prosecution of the most serious crimes of international concern. In this context, I would like to mention the joint initiative for the adoption of a multilateral instrument on legal assistance and extradition for crimes against humanity, war crimes and genocide being promoted by Argentina, Belgium, the Netherlands and Slovenia. Such an initiative is supported by a wide range of States having subscribed to a Permanent Declaration for that purpose. We invite all States to subscribe to the Permanent Declaration and to join us in the promotion of this undertaking in the relevant fora.

Also, Argentina would like to underscore the importance of other external mechanisms that can support the cooperation needs of the ICC, in particular the role of the International Fact-Finding Commission and Justice Rapid Response.

Finally, a challenge related to the organization in which we are holding this Assembly today: the relationship with the United Nations.

With the entry into force of the Rome Statute, the need for accountability for Rome Statute crimes has been integrated in a tangible manner in the considerations of the United Nations and of the international community as a whole. The Security Council has likewise integrated the ICC in its considerations on concrete situations.

The relationship between this organization and the Court is key –always respecting the Court’s independence-. Argentina wishes to recognize the cooperative work of the Office of Legal Affairs (OLA), as a focal point for the ICC, and the Guidelines issued by the Secretary General on non-essential contacts –which are applicable to all UN official, regardless of their rank-.

But the relationship of the UN with the Court is also marked by the relationship of the Security Council with the Court, as this organ has the power of making referrals to the ICC, a power it has used in two situations.

Effective follow up of the referrals made by the Council to the ICC is imperative. The Council cannot continue to receive the Reports of the Prosecutor without a responsible follow up of the evolution she presents. On 23 October 2014, Argentina’s Presidency of the Security Council organized an open debate on the working methods of the Council, which addressed, as one of its key elements, the effective follow up of referrals to the ICC. That debate showed once again that follow up of the referrals to the ICC is supported by an ample majority of the Members of the Council and of the broader membership of the United Nations. We therefore call on the Council to establish as soon as possible a follow up mechanism.

Another aspect of the concern of Argentina is the provision, included the two referrals made, that attempts to exempt nationals of non-Parties from the jurisdiction of the Court. According to the Rome Statute, the Court, in a referral, exercises its jurisdiction over nationals of Parties and non-Parties of the Rome Statute. No pronouncement of the Security Council has the power to amend the Statute so as to grant immunity to nationals of States non-Parties committing Statute crimes in a situation referred to the Court. That is to say, nothing in the text of paragraph 7 or of any other paragraph of the draft just voted would have had the power to alter the norms of the Statute with regard to neither the jurisdiction of the Court in the situation nor the fact that, in case a decision is needed, the judge of its jurisdiction is the Court itself.

With regard to the budget of the Court, I would like to highlight that the financial cost of the two referrals made by the Council to the Court have until now been defrayed exclusively by States Parties. Recently adopted General Assembly resolution 68/305 recognizes that fact. But another fact that has to be recognized is that the Rome Statute provides that the costs of referrals are to be defrayed by the United Nations, a provision also reflected in the Relationship Agreement between the United Nations and the Court –adopted by consensus by the UN General Assembly-. Argentina and other Members of the UN question the regrettable practice of the Security Council regarding financing of the referrals, followed in spite of a vast majority in favor of full compliance with article 115.b. of the Rome Statute and article 13 of the Relationship Agreement, and in spite of the fact that this is a power of the General Assembly. It is not acceptable to put the General Assembly in the position of not being able to take a decision on this matter, one for which the GA has full powers under the UN Charter. Argentina believes this issue must be addressed; otherwise sustainability of the Court’s investigations and credibility of the United Nations could be at risk. We therefore call on Parties to the Rome Statute to work together with a view to ensuring the GA of the United Nations addresses the financing of the referrals of the SC to the ICC in an urgent manner.

The crime of aggression is one of the achievements of the Rome Statute, through the Kampala amendments. My country, like many other States Parties, is committed to the ratification, as soon as possible, of the amendments. Argentina is also committed to the activation of the jurisdiction of the Court with regard to the crime of aggression by 2017. This is another aspect of the ICC that touches upon the United Nations, because even when with the adoption of the crime of aggression amendment

the Rome Statute has made a substantial contribution to international peace and security, making reference to the crime of aggression seems to be an impossible task –due to the opposition of very few States- both at the Security Council and at the General Assembly.

Mr. President,

To conclude, we wish to underscore – as indicated in the Kampala Declaration- “the noble mission and the role of the International Criminal Court in a multilateral system that aims to end impunity, establish the rule of law, promote and encourage respect for human rights and achieve sustainable peace, in accordance with international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations” and reiterate Argentina’s firm commitment to the International Criminal Court.

Thank you.

